



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Viernes 06 de Septiembre de 2024

Año CV

Edición No. 72 Alcance III

CONTENIDO

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 884 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS CAMACHO MANCILLA, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DEL C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO..... 3

DECRETO NÚMERO 885 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL C. MARCOS CÉSAR PARIS PERALTA HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, CONTRA DEL C. ERIC SANDRO LEAL CANTÚ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO..... 30

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 884 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS CAMACHO MANCILLA, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DEL C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO.

Al margen un logotipo que dice: Congreso del Estado de Guerrero. Sexagésima Tercera Legislatura.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

CONSIDERANDO

Que en sesión de fecha 22 de agosto del 2024, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Examen Previo, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que no se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en contra del C. Rafael Martínez Ramírez, presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, en los siguientes términos:

"DICTAMEN DE VALORACIÓN PREVIA

1. Metodología.

La Comisión de Examen Previo atento a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286, de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, se encuentra facultada para emitir el dictamen de valoración previa, en el que se determine la procedencia o improcedencia de las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 191, 193 y 195 de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, realizó el análisis de las Denuncias de Juicio de Responsabilidad Política, promovidas por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en contra del C. Rafael Martínez Ramírez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

En ese entendido, el presente dictamen se divide en dos partes, el de "Antecedentes" donde se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Denuncia de Responsabilidad Política, suscrita por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

En el apartado de "Contenido de las Denuncias", se expone el contenido de la misma, la descripción de los documentos anexos y su alcance jurídico; así como de las actuaciones realizadas por la Comisión de Examen Previo.

2. Antecedentes.

PRIMERO. En sesiones de fecha 21 de mayo de 2024, el Secretario de Servicios Parlamentarios, dio cuenta a la Mesa Directiva del oficio suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, por el que remitió en original el escrito de Denuncias de Juicio de Responsabilidad Política de fechas dieciséis de abril, del año dos mil veinticuatro, presentada por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en contra del C. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del H. Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. Así como del auto de recepción de denuncia, auto de ratificación y sus respectivas certificaciones.

SEGUNDO. Mediante oficio números LXIII/3ER/SSP/DPL/1596/2024, de fechas 21 de mayo de 2024, el Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado, por instrucciones de la Mesa Directiva envió a la Presidencia de la Comisión de Examen Previo, el oficio suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del H. Congreso del Estado, la Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política descritas en el antecedente que precede, así como sus anexos, para su análisis y emisión del Dictamen de Valoración Previa respectivo.

TERCERO. La denuncia fue presentada el día diecinueve de abril de 2024, y se recibió mediante auto de la misma fecha, siendo ratificadas mediante comparecencia del Denunciante celebrada el día veinticuatro de abril del año dos mil veinticuatro, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción II, de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

CUARTO. Recepcionada la Denuncia por parte de la Comisión de Examen Previo, se ordenó turnar una copia a los integrantes, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

3. Contenido de la Denuncia de Responsabilidad Política.

PRIMERO. El escrito de denuncia de Juicio de Responsabilidad Política suscrita por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro, versa en los siguientes términos:

"...HECHOS.

1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL POR EL ACTOR DEL JUICIO DE NULIDAD.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional el día once de septiembre de dos mil quince, los CC. HÉCTOR JESÚS ESPINO MARTÍNEZ, J. JESÚS BUSTOS, RAÚL SÁNCHEZ ARELLANO, RAMIRO BUSTOS CAMACHO, JESÚS LORENZANO ALVARADO, RIGOBERTO SÁNCHEZ ARELLANO, SAÚL RÍOS MORENO, VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ PEÑALOZA, ISAÍAS CORTEZ RODRÍGUEZ Y ANTONIO ARELLANO DUARTE, demandó de la autoridad Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, los actos de autoridad consistentes en:

"...1. La baja de los suscritos CC. HÉCTOR JESÚS ESPINO MARTÍNEZ, J. JESÚS BUSTOS, RAÚL SÁNCHEZ ARELLANO, RAMIRO BUSTOS CAMACHO, JESÚS LORENZANO ALVARADO, RIGOBERTO SÁNCHEZ ARELLANO, SAÚL RÍOS MORENO, VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ PEÑALOZA, ISAÍAS CORTEZ RODRÍGUEZ Y ANTONIO ARELLANO DUARTE, el primero como Comandante, segundo y tercero de los mencionados como segundo comandante, y los demás como policías preventivos, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, ordenada por los CC. Presidente Municipal, mediante aviso verbal de rescisión de mi trabajo.

'2.- SENTENCIA DEFINITIVA.- Una vez desahogada la secuela procesal, en fecha veinticinco de junio de dos mil trece, el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dictó sentencia definitiva, en la que resolvió el expediente número TCA/SRZ/219/2012, declarando la nulidad de los actos impugnados'

'Declaratoria de nulidad que obliga a la autoridad demandada a dar cumplimiento al siguiente efecto:

"...la autoridad demandada, denominada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, ordene la indemnización correspondiente y el pago de las prestaciones que dejaron de cubrirse al C. SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, esto es, desde el momento en que se concretó (sic) su separación y hasta que se realice el pago correspondiente, no así la reinstalación que solicita."

'3.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN LA SALA REGIONAL CON RESIDENCIA EN ZIHUATANEJO, GUERRERO.- Una vez que la sentencia dictada causó ejecutoria, la Sala de origen dio inicio al procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia y mediante acuerdos de fechas veinte de marzo, seis de mayo, veintitrés de junio y cuatro de diciembre de dos mil catorce: dieciséis de abril, uno de julio y veinticinco de agosto de dos mil quince, requirió, previno, apercibió y multó, a la autoridad demandada sin que se haya logrado que ésta diera cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil trece; y en fecha

veintinueve de octubre de dos mil quince, el Magistrado de la Sala natural, a través del oficio número 3806/2015, remitió el expediente TCA/SRZ/219/2012, a la Sala Superior de este Tribunal, para efecto de que se diera continuidad al procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia'

'4.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN LA SALA SUPERIOR.- En acuerdo dictado en la sesión ordinaria de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, la Sala Superior de este Tribunal radicó el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia bajo el número TCA/SS/057/2015, y requirió a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, cumpliera con lo ordenado en la ejecutoria de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, centro del término de tres días hábiles, contando a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído; con el apercibimiento que en caso de omisión se haría acreedora a la imposición de una medida coercitiva consistente en multa de cien días de salario mínimo vigente en esa temporalidad'

'Por proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, impuso la medida de apremio a la autoridad demandada decretada en el proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil quince; en razón de que fue omisa al requerimiento de mérito; se cuantificó la planilla por la cantidad de \$330,946.66 (TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) requiriendo a la autoridad, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al que que sea notificado del acuerdo mencionado, diera cumplimiento a la ejecutoria, mediante el pago al actor, de la cantidad antes indicada, apercibida para el caso de omisión, con la imposición de una medida coercitiva consistente en multa de ciento veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; así mismo, se requería al superior jerárquico de la demandada, para que la conminara al cumplimiento de la ejecutoria'

'En autos del expediente que nos ocupa consta que, mediante acuerdos de Pleno de fecha dieciséis de marzo, veintiséis de junio y siete de diciembre de dos mil diecisiete; veintidós de febrero, nueve de mayo, diecinueve de junio y veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; siete de marzo, doce de junio y cinco de septiembre de dos mil diecinueve; trece de febrero de dos mil veinte; quince de septiembre de dos mil veintiuno; tres y cuatro de marzo, dos de junio de dos mil veintidós; diecinueve de enero, siete de febrero, trece de abril y dos de agosto de dos mil veintitrés, la Sala Superior requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito a los titulares de las autoridades C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal; autoridad demandada; ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Sindica Procuradora; FREDY VARGAS TORRES, Oficial Mayor; y JUAN SALVADOR RAMÍREZ SÁNCHEZ, Tesorero Municipal, autoridades vinculadas, todas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; así también se le hicieron efectivas las multas correspondiente por su omisión e incumplimiento a la sentencia dictada; de igual forma, en desahogo del procedimiento de ejecución de

cumplimiento de sentencia establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, para que en su carácter de Órgano Colegiado y como superior jerárquico de las autoridades demandada y vinculada del presente juicio, las conminara a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada; de igual modo, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se decretó la destitución de los titulares de las autoridades vinculadas CC. FREDY VARGAS TORRES y JUAN SALVADOR RAMÍREZ SÁNCHEZ, Oficial Mayor y Tesorero, ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, sin que a la fecha con ello se haya logrado el cumplimiento de la ejecutoria de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece'

'Debido a lo anterior es que, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, debido a la omisión en el cumplimiento de la ejecutoria dictada, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal ordenó que, dentro del término de treinta días hábiles, contando al día siguiente al en que las partes procesales del juicio en que se actúa fueran notificadas del proveído antes citado, se formulara la denuncia de juicio político correspondiente en contra del C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, y se enviara al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en términos de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero'

'Cabe precisar que, en proveído de fecha tres de marzo de dos mil veintidós (visible a foja 427 del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/057/2015), el Pleno de la Sala Superior cuantificó la planilla de liquidación del actor SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, resultando la cantidad de \$758,547.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) que se le adeudaba hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho el actor'

Ahora bien, a la fecha de la presentación de esta denuncia de juicio político, se han formulado veintiocho requerimientos de cumplimiento de sentencia, no obstante, no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, en la que resolvió el expediente número TCA/SRZ/219/2012. Sentencia que constriñe al C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, a realizar en favor del actor SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, el pago de la cantidad de \$758,547.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) que se le adeuda hasta el veintiocho de

febrero de dos mil veintidós, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho el actor'

Por lo que, la conducta asumida por el servidor público denunciado constituye violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos del C. SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, actor en el juicio de nulidad antes citado y quien obtuvo una sentencia a su favor que no ha sido cumplida por la autoridad sentenciada, actualizándose la hipótesis establecida en los artículos 195 fracción III, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero (sic) y 9 y 10 fracción III, de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, consistente en la violación grave y sistemática de los derechos humanos del C. SIXTO MAGAÑA PEÑALOZA, pues, el servidor público denunciado en forma reiterada ha transgredido en perjuicio de la persona antes referida su derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos'

'Conforme a lo antes expuesto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, aplicable al presente caso, se considera procedente la presentación de esta denuncia de juicio político, solicitando a esa H. Legislatura le dé el trámite correspondiente y en el momento procesal oportuno, se apliquen las sanciones que prevé el artículo 11 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, esto es la destitución del cargo y la inhabilitación del servidor público...'

SEGUNDO. El escrito de denuncia de Juicio de Responsabilidad Política suscrita por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de fecha quince de abril de dos mil veinticuatro, versa en los siguientes términos:

"...HECHOS.

1.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL POR EL ACTOR DEL JUICIO DE NULIDAD.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional el día treinta y uno de octubre de dos mil doce, el C. ANASTACIO VALDEZ ROSAS, demandó de la autoridad Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, los actos de autoridad consistentes en:

"...1. La baja del suscrito como policía municipal preventivo, Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública (sic9 del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, ordenada por los CC. Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública (sic), mediante aviso verbal de recisión de mi trabajo'

2. La retención de mis salarios devengados por ordenes (sic) del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, así como la restitución a la categoría de policía municipal Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública (sic) del H. Ayuntamiento Constitucional de José María Izazaga, Guerrero.

3. Mis salarios caídos desde el 11 de octubre del año 2012, así como también las prestaciones de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, incremento salarial, salarios devengados, indemnización constitucional y los 20 días por año laborado, correspondiente a partir de la fecha de mi despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva..."

2.SENTENCIA DEFINITIVA.- Una vez desahogada la secuela procesal, en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, dictó sentencia definitiva, en la que resolvió el expediente número TCA/SRZ/222/2012, declarando la nulidad de los actos impugnados'

Declaratoria de nulidad que impuso a la autoridad demandada a dar cumplimiento al siguiente efecto:

"...la autoridad demandada, denominada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, ordene la indemnización correspondiente y el pago de las prestaciones que dejaron de cubrirse al C. ANASTACIO VALDEZ ROSAS, esto es, desde el momento en que se concreto (sic) su separación y hasta que se realice el pago correspondiente, no así la reinstalación que solicita..."

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN LA SALA REGIONAL CON RESIDENCIA EN ZIHUATANEJO, GUERRERO.- Una vez que la sentencia dictada causó ejecutoria, la Sala de origen dió inicio al procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia y mediante acuerdos de fecha once de marzo, doce de mayo y tres de diciembre de dos mil catorce; veintitrés de abril, siete de julio y veinticinco de agosto de dos mil quince; y dos de febrero de dos mil dieciséis, requirió, previno, apercibió y multó, a la autoridad demandada, sin que se haya logrado que ésta diera cumplimiento a la ejecutoria del veintidós de mayo de dos mil trece; en fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Sala natural, a través del oficio número 703/2016, remitió el expediente TCA/SRZ/219/2012, a la Sala Superior de este Tribunal, para efecto de que se diera continuidad al procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia'

4.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN LA SALA SUPERIOR.- En acuerdo dictado en la sesión ordinaria de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la Sala Superior de este Tribunal radicó el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia bajo el número TCA/SS/015/2016, y requirió a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, cumpliera con lo ordenado en la ejecutoria de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído; con el apercibimiento que en caso de omisión se haría acreedora a la imposición de una medida coercitiva consistente en multa de cien días de salario mínimo vigente en esa temporalidad'

'Por proveído del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, impuso la medida de apremio a la autoridad demandada decretada en el proveído de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; en razón de que fue omisa al requerimiento de mérito; se cuantificó la planilla por la cantidad de \$335,642.66 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 6/100 M.N.); requiriendo a la autoridad, para que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que sea notificado del acuerdo mencionado, diera cumplimiento a la ejecutoria, mediante el pago al actor, de la cantidad antes indicada, apercibida para el caso de omisión, con la imposición de una medida coercitiva consistente en multa de ciento veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, así mismo, se requeriría al superior jerárquico de la demandada, para que conminara al cumplimiento de la ejecutoria'

'En autos del expediente que nos ocupa consta que, mediante acuerdos de Pleno de fechas dieciséis de marzo y veintinueve de junio de dos mil diecisiete; veintiocho de febrero y ocho de noviembre de dos mil diecinueve; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; tres de marzo y dos de junio de dos mil veintidós; diecinueve de enero, trece de abril y dos de agosto de dos mil veintitrés, la Sala Superior requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito a los titulares de las autoridades C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal; autoridad demandada; ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Sindica Procuradora; FREDY VARGAS TORRES, Oficial Mayor; y JUAN SALVADOR RAMÍREZ SÁNCHEZ, Tesorero Municipal, autoridades vinculadas, todas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero; así también, se le hicieron efectivas las multas correspondientes por su omisión e incumplimiento a la sentencia dictada; de igual forma, en desahogo del procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, para que en su carácter de Órgano Colegiado y como superior jerárquico de las autoridades demandada y vinculada del presente juicio, las conminara a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada; de igual modo, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se decretó la destitución de los titulares de las autoridades vinculadas CC. FREDY VARGAS TORRES y JUAN SALVADOR RAMIREZ SÁNCHEZ, Oficial Mayor y Tesorero, ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de

José María Izazaga, Guerrero, sin que a la fecha con ello se haya logrado el cumplimiento de la ejecutoria de fecha veintidós de mayo de dos mil trece'

'Debido a lo anterior es que, en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, debido a la omisión en el cumplimiento de la ejecutoria dictada, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal ordenó que, dentro del término de treinta días hábiles, contado al día siguiente al en que las partes procesales del juicio en que se actúa fueran notificadas del proveído antes citado, se formulara la denuncia de juicio político correspondiente en contra del C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, y se enviara al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en términos de la Ley número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero'

'Cabe precisar que, en proveído de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, (visible a foja 367 del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/015/2016), el Pleno de la Sala Superior cuantificó la planilla de liquidación del actor ANASTACIO VALDEZ ROSAS, resultando la cantidad de \$7762,11.66 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 66/100 M.N.) que se le adeudaba hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho el actor'

'Ahora bien, a la fecha de la presentación de esta denuncia de juicio político, se han formulado veintitrés requerimientos de cumplimiento de la sentencia, no obstante, no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, en la que resolvió el expediente número TCA/SRZ/222/2012. Sentencia que constriñe al C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, a realizar en favor del actor ANASTACIO VALDEZ ROSAS, el pago de la cantidad de \$762,115.66 (SETENCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 66/100 M.N.), que se le adeuda hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho el actor'

'Por lo que, la conducta asumida por el servidor público denunciado constituye violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos del C. ANASTACIO VALDEZ ROSAS, actor en el juicio de nulidad antes citado y quien obtuvo una sentencia a su favor que no ha sido cumplida por la autoridad sentenciada, actualizándose la hipótesis establecida en los artículos 195 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero y, 9 y 10 fracción III, de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, consistente en la violación grave y sistemática de los derechos humanos del C. ANASTACIO VALDEZ ROSAS, pues, el servidor público denunciado en forma reiterada ha transgredido en perjuicio de la persona antes referida su derecho

fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."

En observancia al principio de economía procesal y a la jurisprudencia que adelante se plasma, únicamente se transcribe una parte de los hechos de la denuncia, para dar una visión de la pretensión del denunciante, haciendo un análisis más integrar en el cuerpo del Dictamen.

<i>Tesis: 2a./J. 58/2010</i>	<i>Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta</i>	<i>Novena Época</i>	<i>164618 1 de 1</i>
<i>Segunda Sala</i>	<i>Tomo XXXI, Mayo de 2010</i>	<i>Pag. 830</i>	<i>Jurisprudencia(Común)</i>

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

TERCERO. Recepcionadas las Denuncias, se turnó una copia a cada uno de los integrantes de la Comisión de Examen Previo, para su conocimiento y análisis de procedibilidad.

4. Considerandos.

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, en correlación con lo dispuesto por los artículos 49, fracción XXV, y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 286, la Comisión de Examen Previo, tiene plenas facultades para conocer y dictaminar el asunto de antecedentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 108, 109 y 110, establece:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

...

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

- I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.**

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. ...

III. ...

...

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

...

...

...

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

...

...

LO RESALTADO ES PROPIO.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser

sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

...

...

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

LO RESALTADO ES PROPIO

En atención a dichas disposiciones Constitucionales, nuestro marco normativo constitucional local, establece en los artículos 191, 193 y 195, lo siguiente:

Artículo 191. Son servidores públicos del Estado los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.

1. Los servidores públicos se encuentran sujetos al siguiente régimen jurídico:

...

...

...

...

...

...

...

II. Están obligados a cumplir con sus responsabilidades en las formas y en los términos dispuestos en esta Constitución y en las leyes correspondientes. Al respecto, los particulares podrán exigir en todo momento que los servicios públicos que prestan el Estado y los Municipios se realicen, apegados a los principios de ética, eficacia, eficiencia, transparencia y respeto a los derechos humanos. Asimismo, deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley de la materia.

...

III. Deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;

...
...
...
...
...
...
...

5. Con independencia de las causas en materia de responsabilidad política previstas en el presente Título, se consideran causas graves:

- a) Muerte;
- b) Incapacidad física permanente; y,
- c) Renuncia aceptada.

Artículo 193. Los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, con independencia de la jerarquía, denominación u origen de su encargo.

1. Los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos respetarán el derecho de audiencia, se desarrollarán autónomamente, sin que puedan imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza;
2. Cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá denunciar ante el Congreso del Estado las conductas a que se refiere este Capítulo; y,
3. La ley determinará los sujetos, supuestos de responsabilidad, procedimientos, autoridades competentes y las sanciones del régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.

Artículo 195. Incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

Además, procederá el fincamiento de responsabilidad política por las siguientes causas graves:

- I. Se ataque a las instituciones democráticas;
- II. Se ataque la forma de gobierno republicano, representativo y federal;
- III. Por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
- IV. Ataque a la libertad de sufragio;

- V. Usurpación de atribuciones;**
- VI. Abandono del cargo;**
- VII. Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y a las leyes federales o del Estado cuando cause perjuicios graves a la Federación, al propio Estado de Guerrero, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; y,**
- VIII. Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos patrimoniales o económicos de la Entidad.**

1. Son sujetos de responsabilidad política:

- I. Los diputados del Congreso del Estado;**
 - II. El Gobernador del Estado;**
 - III. Los secretarios de despacho y el Contralor General del Estado;**
 - IV. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Guerrero;**
 - V. Los Presidentes, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos;**
 - VI. Los titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal;**
 - VII. El Presidente y los consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;**
 - VIII. Los consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;**
 - IX. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;**
 - X. El Fiscal General;**
 - XI. El Auditor Superior del Estado;**
 - XII. Los consejeros del Consejo de Políticas Públicas;**
 - XIII. Los consejeros del Consejo de la Judicatura; y,**
 - XIV. El Defensor General del Instituto de la Defensoría Pública.**
- 2. La responsabilidad política se sancionará con la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios, por un periodo máximo de diez años, en los términos dispuestos en la ley;**
- 3. La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso del Estado. Corresponde a la Comisión Instructora sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular la acusación ante el Pleno del Congreso del Estado, erigido en gran jurado, quién dictará resolución con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros;**
- 4. La resolución del Congreso del Estado será definitiva e inatacable;**
- 5. Si la resolución es absolutoria, el servidor público continuará en el ejercicio de sus funciones; y,**
- 6. La responsabilidad política sólo será exigible durante el período en el cual el servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, o dentro de los dos años siguientes a partir de que concluya su encargo.**

LO RESALTADO ES PROPIO.

Por otra parte, la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en sus artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, señala:

Artículo 5. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 193 numeral 1, 195, 196 y 198 de la Constitución Estatal, respetarán los derechos de audiencia y debido proceso, estipulados en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales vinculantes, se desarrollarán de manera autónoma e independiente, según su naturaleza, y por la vía procesal que corresponda. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

...

Artículo 7. En los procedimientos para resolver sobre las responsabilidades política y penal, se observarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del Código Nacional.

Artículo 8. Son sujetos de responsabilidad política los servidores públicos que establece el artículo 195 numeral 1 de la Constitución Estatal.

La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso.

Artículo 9. Procede el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, se realicen en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 10. Afectan los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

- I. El ataque a las instituciones democráticas;
- II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal;
- III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
- IV. El ataque a la libertad de sufragio;
- V. La usurpación de atribuciones;
- VI. El abandono del cargo;
- VII. Cualquier infracción a las Constituciones Federal y Estatal, a las leyes federales o locales cuando cause perjuicios graves a la Federación, al Estado, al Municipio, a la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
- VIII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior; y
- IX. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las leyes que determinan el manejo de los recursos patrimoniales o económicos estatales.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se estará a lo dispuesto por la legislación penal y, en su caso, una vez reunidos los requisitos procedimentales, se formulará la declaración de procedencia por responsabilidad penal a la que alude la Constitución Estatal y la presente Ley.

Artículo 11. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a diez años.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

En el juicio político no procede el desistimiento.

Artículo 12. Cualquier ciudadano bajo su responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante el Congreso por las conductas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades originarias del Estado, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan, dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua originaria.

La denuncia deberá estar soportada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Comisión de Examen Previo del Congreso, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes.

Las denuncias anónimas y las no ratificadas en el término establecido, no producirán efecto. En cualquiera de estos casos, el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente y el Presidente de la Mesa Directiva ordenará su archivo.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de los dos años después de la conclusión de sus funciones.

Artículo 13. La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso.

Corresponde a la Comisión de Examen Previo del Congreso declarar la procedencia del juicio político.

A la Comisión Instructora le compete, sustanciar el procedimiento de juicio político establecido en esta Ley y formular la acusación ante el Pleno del Congreso erigido en Gran Jurado, quién emitirá resolución con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Artículo 14. La determinación del juicio político se sujetará a lo siguiente:

- I. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso y ratificarse mediante comparecencia ante la misma, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Si se trata de una denuncia presentada en lengua originaria, el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios solicitará su traducción inmediata al español para proceder conforme lo señalan las disposiciones siguientes:**

El escrito de denuncia deberá reunir al menos, los requisitos siguientes:

- a) Nombre y domicilio del denunciante; en su caso, señalar domicilio en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo;**
 - b) Nombre del servidor público denunciado y el cargo que desempeña o desempeñó;**
 - c) Narración de los hechos que contengan los actos u omisiones por los que se considera se cometió la infracción, relacionándolos con la conducta o conductas señaladas en el artículo 10 de esta Ley;**
 - d) Los elementos de prueba en que se apoyan los hechos narrados en el escrito de denuncia; y**
 - e) Firma o huella digital, en su caso, del denunciante.**
- II. Ratificado el escrito de denuncia, la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso informará al Pleno y a la Comisión Permanente, en la sesión inmediata posterior, lo establecido en la fracción anterior para su turno a la Comisión de Examen Previo.**
 - III. La Comisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 10 de la propia Ley, y si los elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Comisión de Examen Previo desechará de plano la denuncia presentada y ordenará su archivo definitivo, dará cuenta de ello a la parte interesada y a la Mesa Directiva para los efectos legales conducentes.**

A señalamiento expreso del denunciante, la Comisión de Examen Previo podrá solicitar las pruebas que se encuentren en posesión de una autoridad.

En caso de la presentación de elementos de prueba supervenientes, la Comisión de Examen Previo, mediante turno del Pleno, podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de elementos.

IV. El dictamen que emita la Comisión de Examen Previo, que deseche una denuncia, podrá ser rechazado por el Pleno del Congreso especificando los argumentos de su determinación y devuelto a la Comisión de Examen Previo para una nueva revisión; y

V. El dictamen que formule la Comisión de Examen Previo que declare procedente la denuncia, será remitida al Pleno del Congreso para efecto de formular el acuerdo correspondiente y ordenar su turno a la Comisión Instructora.

LO RESALTADO ES PROPIO.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en la fracción III, del artículo 14 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Comisión de Examen Previo deberá determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos que pueden ser sujetos de Responsabilidad Política, así como establecer que las denuncias contengan elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponda a las enumeradas en el artículo 10 de la citada Ley, y que éstos permitan presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, pruebas y hechos suficientes para que amerite iniciar el procedimiento de Juicio Político. Caso contrario, deberán desecharse de plano las denuncias correspondientes.

En consecuencia, para determinar si la persona RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ denunciada, es de los Servidores Públicos que pueden ser Sujetos de responsabilidad a través del Juicio de Responsabilidad Política, es necesario analizar lo establecido en el artículo 195, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que establece:

Artículo 195. Incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

1. Son sujetos de responsabilidad política:

I. Los diputados del Congreso del Estado;

II. El Gobernador del Estado;

III. Los secretarios de despacho y el Contralor General del Estado;

IV. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Guerrero;

V. Los Presidentes, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos;

VI. Los titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal;

- VII. El Presidente y los consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;
- VIII. Los consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;
- IX. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
- X. El Fiscal General;
- XI. El Auditor Superior del Estado;
- XII. Los consejeros del Consejo de Políticas Públicas;
- XIII. Los consejeros del Consejo de la Judicatura; y,
- XIV. El Defensor General del Instituto de la Defensoría Pública.

Al efecto, de conformidad con lo señalado por el Denunciante Licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, es Presidente del H. Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, circunstancia que se acredita con las actuaciones que obran en los expedientes de ejecución de cumplimiento de sentencia números TCA/SS/087/2018 y TCA/SRZ/352/2015, mismos que en copias debidamente certificadas se agregaron a los escritos de Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política, circunstancia que se corrobora con los listados de Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, para los ejercicios 2018-2021 y 2021-2024, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero consultable en su página web https://iepcgro.mx/principal/sitio/procesos_electorales; con lo que se acredita que el denunciado se encuentra dentro de los servidores públicos que pueden ser sujetos de responsabilidad a través del Juicio de Responsabilidad Política, de conformidad con la fracción V, del numeral 1, del artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cumplimentándose así el primer requisito que señala la fracción III, del artículo 14 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

TERCERO. Siguiendo con los requisitos establecidos en la fracción I, inciso c), del artículo 14 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, respecto a que las Denuncias contengan la especificación de hechos y elementos de prueba que justifiquen la conducta atribuida y que se adecúen a las hipótesis normativas descritas en el artículo 10 de la citada Ley.

Al efecto, esta Comisión Dictaminadora, analizado los escritos de Denuncia suscritos por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, personalidad que acredita con el nombramiento de fecha 09 de enero de 2023, expedido por el Licenciado Jesús Lira Garduño, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en sus artículos 23 y 25 fracción I, tiene facultades para representar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

"...Artículo 23. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, será designado de entre los Magistrados de la Sala Superior en la primera sesión anual que celebren en el mes de enero del año que corresponda y tendrá a su cargo la representación del Tribunal y de la Sala Superior'

'Artículo 25. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y de la Sala Superior tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Representar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero ante todas las autoridades y otorgar poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración para que lo representen en los procedimientos jurisdiccionales en que sea parte el Tribunal;..."**

Asimismo, sus denuncias las sustenta en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra citan:

"...ARTICULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, comine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta'

'La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia'

'Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional'

'ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político correspondiente..."

La causa en la que sustenta su Denuncia es la falta de cumplimiento de las sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRZ/352/2015 por la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en la que se determinó:

TCA/SRZ/219/2012

"...PRIMERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el escrito de demanda, en los términos descritos en el último de los considerandos de este fallo..."

"...el efecto de esta sentencia es para que la autoridad demandada, denominada PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO, proceda a pagar a los actores Héctor Jesús Espino Martínez, J. Jesús Bustos, Raúl Sánchez Arellano, Ramiro Bustos Camacho, Víctor Alfonso Sánchez Peñaloza, Saúl Ríos Moreno, Isaias Cortez Rodríguez y Antonio Arellano Duarte la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario integrado, más veinte días por cada año prestado, así como el pago de los haberes o salarios que dejaron de percibir incluido aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma categoría, hasta que se realice el pago correspondiente, no así por lo que se refiere a los CC. Jesús Lorenzano Alvarado y Rigoberto Sánchez Arellano, quienes no aportaron pruebas con las que acrediten haber pertenecido a la Dirección de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero..."

Como se aprecia, la sentencia se dictó en fechas veintinueve de marzo de 2016, mismas que se hicieron del conocimiento al entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, mediante oficio número 1148/2016, de fecha 15 de abril de 2016, recibido en esa misma fecha.

Posteriormente, debido al incumplimiento y de los diversos requerimientos a la Autoridad demandada, la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, mediante auto de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, ordenó enviar el expediente a la Sala Superior del citado Tribunal, para que continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto por los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.

Radicados los asuntos en la Sala Superior, mediante auto de fecha diecisiete de septiembre del año 2018, continuó el procedimiento de ejecución de sentencia en términos de lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, bajo el número de expediente TJZ/SS/087/2018.

Posteriormente, mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de 2023, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobó "...procedente dar INICIO A LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO en contra del C. RAFAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José María Izazaga, Guerrero, por tal motivo, dentro de término de TREINTA DÍAS HÁBILES posteriores a la notificación de la presente resolución, en caso de no haber realizado el pago a que fue condenada la demanda, se remitirán los autos del expediente principal TCA/SRZ/352/2015 y del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TC/SS/087/2018 al Honorable Congreso del Estado, para que sea este Órgano Legislativo quien resuelva lo que en derecho proceda..."

La resolución de mérito fue notificada a la parte Actora el 27 de noviembre de 2023, y a la parte demandada el catorce de diciembre de 2023, en consecuencia el término de 30 días

hábiles que se le concedió para la incoación del Juicio de Responsabilidad Política le feneció el día 16 de febrero del año 2024, considerando que el Tribunal de Justicia Administrativa salió a vacaciones el día 15 de diciembre y regreso el día 08 de enero de 2024.

Asimismo, en autos del expediente enviado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, se constata que con fechas veintiséis de noviembre de 2021, la parte demanda -Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José María Izazaga- dió cumplimiento al pago correspondiente a los CC. ISAÍAS CORTÉZ RODRÍGUEZ y ANTONIO ARELLANO DUARTE, siendo así aprobado por el Tribunal mediante auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós; posteriormente, mediante comparecencias de fechas doce de febrero de dos mil veinticuatro se constata que el C. J. JESÚS BUSTOS BUSTOS, se dió por pagado de la cantidad que le correspondía de acuerdo a la resolución emitida en autos, lo que se dió cuenta en el auto de la misma fecha.

Aunado a lo anterior, mediante oficio número SIN/2024/000131, de fecha 17 de junio de 2024, signado por la C. Angélica Hernández, Síndica Procuradora del municipio Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por medio del cuál presenta copias certificadas del expediente TCA/SS/087/2018, así como el Acta de Cabildo de fecha 20 de mayo de 2024, de donde se obtiene que también con fecha veintidós de abril de dos mil veinticuatro, el Ayuntamiento demandado dió cumplimiento al pago correspondiente al C. Ramiro Bustos Camacho, con lo que se tiene por parte de esta Comisión Dictaminadora acreditado el cumplimiento parcial de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/352/2015.

En consecuencia, primero, la demanda de Juicio de Responsabilidad Política fue ingresada el día 19 de abril de dos mil veinticuatro, posterior al término de 30 días que la Sala Superior ordenó dar cumplimiento. Segundo, en autos de los expediente que fueron agregados a la denuncia que se analiza se constata que la parte Denunciada ha dado cumplimiento parcial de la sentencia, de conformidad con las constancias de autos de fechas veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, así como del doce de febrero y veintidós de abril, del año dos mil veinticuatro.

Por consecuencia, dado el cumplimiento parcial de la resolución en donde fue condenada la parte denunciada, esta Comisión considera improcedente incoar Juicio de Responsabilidad Política, tomando en cuenta el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en el registro jurisprudencial número 161065, de la Segunda Sala, tesis 2a./J.127/2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1330, cuyo texto es el siguiente:

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES INFUNDADO CUANDO TIENE COMO PREMISA DE ORIGEN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL TRASCENDENTE A LO EXIGIDO EN EL FALLO DE AMPARO.

Si al resolver un incidente de inejecución de sentencia se advierte la existencia de un cumplimiento parcial trascendente a lo exigido, aquél debe declararse infundado, pues si su finalidad es analizar y determinar si existe desacato a la ejecutoria y si este último es inexcusable, de lo cual dependerá el enjuiciamiento a la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la existencia de ese cumplimiento trascendente el incidente de inejecución carece de fundamento constitucional y legal, por lo que el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo, es el medio de impugnación procedente para remediar los vicios de ejecución de la sentencia de amparo.

Incidente de inejecución 1248/2010. Agustín Cervantes Ortiz. 12 de enero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Incidente de inejecución 1183/2010. Sergio Ruiz Estrada. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.

Incidente de inejecución 881/2010. A.E. Lomelín A., S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Incidente de inejecución 596/2010. Asociación Pediátrica, S.A. de C.V. 23 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Incidente de inejecución 557/2011. Raúl Felipe Hass May. 25 de mayo de 2011. Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia 127/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de julio de dos mil once.

También resulta aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia:

Registro digital: 163809. Instancia: Pleno.- Novena Época.- Materia(s): Común.- Tesis: P./J. 88/2010.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 5.-Tipo: Jurisprudencia

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO CON ANTERIORIDAD SE HAYA DESESTIMADO OTRO INCIDENTE SIMILAR EN EL MISMO JUICIO DE GARANTÍAS, POR ESTIMAR QUE EXISTÍA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que cuando la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja. Asimismo, en la jurisprudencia P./J. 47/2009, de rubro: "INEJECUCIÓN

DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA.", estableció que cuando los quejosos, en los procedimientos de ejecución de sentencias de amparo relacionados con contribuciones, no quedan satisfechos con las cantidades devueltas por la autoridad, una vez seguido el procedimiento jurisdiccional respectivo deben hacer valer sus derechos, en la parte que no se satisfizo su pretensión, a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. En congruencia con esos criterios, si un primer incidente de inejecución de sentencia se declara sin materia o improcedente al existir un cumplimiento parcial de la sentencia, debe ser improcedente el segundo o ulterior planteado con base en que no se cumplieron todos los aspectos del fallo protector, pues esos argumentos deben ser materia del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Con mayor razón si se considera que en términos del Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de un incidente de inejecución en ejercicio de competencia delegada, no tienen facultades para pronunciarse sobre si está o no cumplida una sentencia de amparo, de manera que no podrán determinar, en un segundo o ulterior incidente de inejecución, que éste ha quedado sin materia por existir una determinación previa en el sentido de que había un cumplimiento parcial.

Contradicción de tesis 487/2009. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de junio de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco García Sandoval. El Tribunal Pleno, el seis de septiembre en curso, aprobó, con el número 88/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil diez. Nota: Las tesis P. LXV/95 y P./J. 47/2009; y el Acuerdo General 12/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos II, octubre de 1995, página 116 y XXX, julio y diciembre de 2009, páginas 39 y 1687, respectivamente.

CUARTO. Es importante destacar lo que establece el artículo 10 de la de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que de las hipótesis que ahí se preven se puede desprender la conducta probable de responsabilidad del servidor público, por lo que enseguida se transcribe dicho artículo normativo:

Artículo 10. Afectan los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

- I. El ataque a las instituciones democráticas;
- II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal;
- III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
- IV. El ataque a la libertad de sufragio;

- V. La usurpación de atribuciones;
- VI. El abandono del cargo;
- VII. Cualquier infracción a las Constituciones Federal y Estatal, a las leyes federales o locales cuando cause perjuicios graves a la Federación, al Estado, al Municipio, a la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
- VIII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior; y
- IX. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las leyes que determinan el manejo de los recursos patrimoniales o económicos estatales.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se estará a lo dispuesto por la legislación penal y, en su caso, una vez reunidos los requisitos procedimentales, se formulará la declaración de procedencia por responsabilidad penal a la que alude la Constitución Estatal y la presente Ley.

De las constancias de los expediente remitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se puede advertir que durante la secuela de ejecución de sentencia la parte condenada -Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero- ha estado dando cumplimiento de manera parcial a la sentencia emitida en su contra, por lo que de conformidad con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente incoar Juicio de Responsabilidad Política solicitado por la Denunciante".

Que en sesiones de fecha 22 de agosto del 2024, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiéndose la Comisión Dictaminadora reservado el derecho de exponer los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que no se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en contra del C. Rafael Martínez Ramírez, presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. Emítase el Decreto

correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 884 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS CAMACHO MANCILLA, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CONTRA DEL C. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. No se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por el Licenciado Luis Camacho Mancilla, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en contra del C. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del H. Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, derivado de los expedientes: TCA/SRZ/352/2015 y TCA/SS/087/2017.

ARTÍCULO SEGUNDO. Sométase el presente dictamen a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado para su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente dictamen a la parte denunciante.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el conocimiento general y efectos legales procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.

DIPUTADA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
JENNYFER GARCÍA LUCENA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ANGÉLICA ESPINOZA GARCÍA.
Rúbrica.

**DIPUTADA SECRETARIA.
PATRICIA DOROTEO CALDERÓN.
Rúbrica.**

DECRETO NÚMERO 885 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL C. MARCOS CÉSAR PARIS PERALTA HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, CONTRA DEL C. ERIC SANDRO LEAL CANTÚ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO.

Al margen un logotipo que dice: Congreso del Estado de Guerrero. Sexagésima Tercera Legislatura.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 22 de agosto del 2024, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Examen Previo, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que no se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, contra del C. Eric Sandro Leal Cantú, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en los siguientes términos:

“D I C T A M E N DE VALORACIÓN PREVIA

1. Metodología.

La Comisión de Examen Previo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286, de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, se encuentra facultada para emitir el dictamen de valoración previa, en el que se determine la procedencia o improcedencia de las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 191, 193 y 195 de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, realizó el análisis de la Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política, promovida por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, en contra del C. Eric Sandro Leal Cantú, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.

Por lo que en el apartado denominado de “Antecedentes” del presente Dictamen, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno

para el dictamen de la Denuncia de Responsabilidad Política, suscrita por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado.

En el apartado de "Contenido de la Denuncia", se expone el contenido de la misma, la descripción de los documentos anexos y su alcance jurídico; así como de las actuaciones realizadas por la Comisión de Examen Previo.

2. Antecedentes.

PRIMERO. En sesión de fecha 16 de febrero de 2023, el Secretario de Servicios Parlamentarios, dio cuenta a la Mesa Directiva de la Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política de fecha veinticinco de enero y recepcionado el tres de febrero del año dos mil veintitrés, presentada por el ciudadano C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, en contra del C. Eric Sandro Leal Cantú, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco. Así como del auto de recepción de denuncia, auto de ratificación, diversos anexos en copia simples y sus respectivas certificaciones.

SEGUNDO. Mediante oficio número LXII/2DO/SSP/DPL/0988/2023, de fecha 16 de febrero de 2023, el Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado, por instrucciones de la Mesa Directiva envió a la Presidencia de la Comisión de Examen Previo, la Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política descrita en el antecedente que precede, así como sus anexos, para su análisis y emisión del Dictamen de Valoración Previa respectivo.

TERCERO. La denuncia fue presentada el día tres de febrero de 2023 y se recepcionó mediante auto de fecha siete del mismo mes y año, ratificándose por comparecencia el día nueve de febrero de dos mil veintitrés.

CUARTO. Recepcionada la Denuncia por parte de la Comisión de Examen Previo, se ordenó turnar una copia a los integrantes, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

3. Contenido de la Denuncia de Responsabilidad Política.

PRIMERO. No se transcribirán íntegramente las consideraciones en que sustenta la Denunciante los actos reclamados de los Servidores Públicos Denunciados, ni los conceptos de violación expresados en su contra pues, por una parte, no existe ninguna disposición legal que obligue a que obren formalmente en el presente dictamen, inclusive, el artículo 14 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no dispone nada respecto de su transcripción siempre y cuando contenga su análisis sistemático; y, por otra parte, porque desde la recepción de la Denuncia en la Presidencia de la Comisión, se ha entregado a los Diputados y Diputadas integrantes de este cuerpo colegiado: copia de la Denuncia, como sus anexos.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis aislada publicada en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción y, además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."

También es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010 (9a.), publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice con el rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

En consecuencia, el escrito de Denuncia de Juicio de Responsabilidad Política suscrita por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, entre otros puntos, versa en los siguientes términos:

"...2.- Por otro lado, en términos de los artículos 18 fracciones XV y XVII, 41 fracción VII, 44 y 89 fracción XXIII, de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y 8 fracciones I y XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, el suscrito, Auditor Superior del Estado cuenta con la atribución de presentar las denuncias de juicio político, en términos de las leyes aplicables .

3.- La fracción X del artículo 4 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, señala el concepto de entes públicos, asimismo en la fracción XI del mismo precepto jurídico establece las entidades fiscalizadas, que para mejor comprensión se transcriben:

"Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá y conceptualizará por:

X. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, las dependencias, entidades de la administración pública paraestatal, los municipios, dependencias, entidades de la administración pública paramunicipal, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;

XI. Entidades fiscalizadas: Los Entes Públicos: las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos, no obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;"

Como puede apreciarse, los municipios como entes públicos, se ubican en el supuesto de entidades fiscalizadas, obligados entonces a rendir cuentas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y en el caso, el precepto 14 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece que el Informe Financiero Semestral comprenderá el periodo de enero a junio del ejercicio fiscal que se informe, así como que comprenderá dicho Informe, mientras que el diverso 15 de la Ley señalada, prevé el plazo para la presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022 que nos ocupa, mismo que para el aludido ejercicio fiscal sería en la segunda quincena del mes de agosto del año dos mil veintidós, preceptos que para mayor comprensión se transcriben a continuación:

"Artículo 14. El Informe Financiero Semestral comprenderá el periodo de enero a junio del ejercicio fiscal que se informe y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el Presupuesto de Egresos; y

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables”.

”Artículo 15. El Informe Financiero Semestral forma parte de la Cuenta Pública y deberá presentarse a la Auditoría Superior del Estado en la segunda quincena del mes de agosto del ejercicio fiscal que se informe, en los términos que se establezcan en los criterios que para tales efectos se emitan.

La falta de presentación del Informe Financiero Semestral dentro del término establecido, será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes.”

4.- Por su parte la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, por cuanto hace al Presidente Municipal, en su artículo 72 señala:

”ARTÍCULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos.

Mientras que el diverso 73 fracción XXVII de esa misma Ley establece:

”ARTÍCULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes:

XXVII.- Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia”.

5.- Como se acredita con la CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, de fecha 01 de diciembre del 2021, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la cual agrego a la presente en copia simple como ANEXO TRES, y que para su perfeccionamiento deberá solicitarse la copia debidamente certificada a la autoridad emisora, el ciudadano Eric Sandro Leal Cantú, fue electo como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Iliatenco, Guerrero, por tanto, dicho servidor público directamente, tienen la obligación de presentar a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022 del citado Ayuntamiento, y que debió hacer a más tardar el 31 de agosto del 2022, de acuerdo a la normatividad antes citada.

6.- Derivado de las consideraciones escritas en los numerales anteriores, el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, tenía que ser presentado por el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, a través del Presidente Municipal a más tardar el 31 de agosto del 2022, ello además observando los Criterios para la integración y presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal

2022, aplicables a los municipios del estado de Guerrero, mismo que se encuentra publicado en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, donde además se consideró la entrega de forma digital de dicho informe a través del sistema ASEnet Cuenta Pública, de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, lo que en el presente caso no aconteció.

7.- De lo anterior, mediante acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Licenciado Marcos César Paris Peralta Hidalgo, Auditor Superior del Estado de Guerrero, requirió de entre otro al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Iliatenco Guerrero, el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, acuerdo que fue debidamente notificado con fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través del oficio número ASE-4755-2022 al ciudadano Eric Sandro Leal Cantú, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento que nos ocupa, en el que se le otorgó un término improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido de dichos oficios, para que hiciera entrega a través del sistema ASEnet Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, apercibido que de no hacerlo así se le aplicaría una multa de seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin embargo, el citado servidor público hizo caso omiso a dicho requerimiento, por lo que mediante acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se le hizo efectiva la multa, lo anterior se acredita con las copias certificadas integradas en un legajo que adjunto a la presente como ANEXO CUATRO.

Cabe señalar, que aún y después del requerimiento y aplicación de multa, el aquí denunciado, a la fecha no ha presentado el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, con lo cual queda evidenciada la omisión en que está incurriendo el ciudadano Eric Sandro Leal Cantú, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, pues de los artículos y Criterios señalados se desprende que, en el caso, el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, debió entregarse a más tardar el 31 de agosto del 2022, situación que a la fecha no ha acontecido.

8.- De acuerdo con la Certificación de Inexistencia de Registro de Presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022 en el Sistema ASEnet Cuenta Pública, por parte del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, que se agrega a la presente denuncia en original como ANEXO CINCO, se demuestra que a la fecha de emisión de la misma el denunciado no había presentado a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, el Informe aludido, ni a la presente fecha lo ha realizado

9.- Por lo anterior, es que se deduce la existencia de la presunta responsabilidad por parte del aquí denunciado, puesto que a la fecha no ha cumplido con las obligaciones que las leyes le imponen como servidor público, aun y cuando se le

requirió la presentación y cumplimiento de la normatividad aplicable, mencionada en los numerales tres y cuatro del presente capítulo de hechos, por lo que, al no presentar su Informe Financiero Semestral, se actualiza lo establecido en el artículo 195, fracción VIII, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 195. Incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan leyes que regulen el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

Además, procederá el fincamiento de responsabilidad política por las siguientes causas graves:

VIII. Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos patrimoniales o económicos de la Entidad.

Reiterando que, al no dar cumplimiento con la normatividad a la cual se encuentra sujeto por el cargo conferido, es inconcuso que incurre en una responsabilidad política, pues éste en el ejercicio de sus funciones está realizando actos u omisiones que vulneran los principios fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, infringiendo con su actuar lo establecido en la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, siendo, por ende, sujeto de responsabilidad política en términos del artículo 195, numeral 1, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Lo anterior, además, implica la intención de ocultar la información sobre el manejo de los recursos públicos que le fueron ministrados al H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. mismos que forman parte de los recursos patrimoniales y/o económicos del municipio- pues es a quien corresponde entregar el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022, como Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, y que por ello transgrede la norma a la que se encuentra sujeto por el cargo conferido, teniendo la obligación ineludible de rendir cuentas sobre el ejercicio y administración de los recursos públicos transferidos a dicho Municipio.

De los hechos anteriormente narrados surge la necesidad de presentar formal denuncia de Juicio Político en contra del ciudadano Eric Sandro Leal Cantú, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, a efecto de que esa H. soberanía, proceda a realizar el procedimiento de juicio político establecido en la Ley Numero 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por todos los hechos narrados, y los cuales se considera actualizan las causales establecidas en el artículo 195, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en su momento fincar responsabilidad política en términos de la normatividad aplicable...”

4. Considerandos.

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, en correlación con lo dispuesto por los artículos 49, fracción XXV, y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 286, la Comisión de Examen Previo, tiene plenas facultades para conocer y dictaminar el asunto de antecedentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 108, 109 y 110, establece:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

...

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

- I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el

ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

...

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

...

...

...

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

...

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos

terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

En atención a dichas disposiciones Constitucionales, nuestro marco normativo constitucional establece en los artículos 191, 193 y 195, lo siguiente:

Artículo 191. Son servidores públicos del Estado los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.

I. Los servidores públicos se encuentran sujetos al siguiente régimen jurídico:

...
...
...
...
...
...
...

II. Están obligados a cumplir con sus responsabilidades en las formas y en los términos dispuestos en esta Constitución y en las leyes correspondientes. Al respecto, los particulares podrán exigir en todo momento que los servicios públicos que prestan el Estado y los Municipios se realicen, apegados a los principios de ética, eficacia, eficiencia, transparencia y respeto a los derechos humanos. Asimismo, deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley de la materia.

...

III. Deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;

...
...
...
...
...
...
...

5. Con independencias de las causas en materia de responsabilidad política previstas en el presente Título, se consideran causas graves:

- a) Muerte;
- b) Incapacidad física permanente; y,
- c) Renuncia aceptada.

Artículo 193. Los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, con independencia de la jerarquía, denominación u origen de su encargo.

- 1. Los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos respetarán el derecho de audiencia, se desarrollarán autónomamente, sin que puedan imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza;
- 2. Cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá denunciar ante el Congreso del Estado las conductas a que se refiere este Capítulo; y,
- 3. La ley determinará los sujetos, supuestos de responsabilidad, procedimientos, autoridades competentes y las sanciones del régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.

Artículo 195. Incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

Además, procederá el fincamiento de responsabilidad política por las siguientes causas graves:

- I. Se ataque a las instituciones democráticas;
- II. Se ataque la forma de gobierno republicano, representativo y federal;
- III. Por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
- IV. Ataque a la libertad de sufragio;
- V. Usurpación de atribuciones;
- VI. Abandono del cargo;
- VII. Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y a las leyes federales o del Estado cuando cause perjuicios graves a la Federación, al propio Estado de Guerrero, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; y,
- VIII. Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos patrimoniales o económicos de la Entidad.

1. Son sujetos de responsabilidad política:

- I. Los diputados del Congreso del Estado;
- II. El Gobernador del Estado;
- III. Los secretarios de despacho y el Contralor General del Estado;

- IV. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Guerrero;
 - V. Los Presidentes, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos;
 - VI. Los titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal;
 - VII. El Presidente y los consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;
 - VIII. Los consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;
 - IX. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
 - X. El Fiscal General;
 - XI. El Auditor Superior del Estado;
 - XII. Los consejeros del Consejo de Políticas Públicas;
 - XIII. Los consejeros del Consejo de la Judicatura; y,
 - XIV. El Defensor General del Instituto de la Defensoría Pública.
2. La responsabilidad política se sancionará con la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios, por un periodo máximo de diez años, en los términos dispuestos en la ley;
 3. La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso del Estado. Corresponde a la Comisión Instructora sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular la acusación ante el Pleno del Congreso del Estado, erigido en gran jurado, quién dictará resolución con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros;
 4. La resolución del Congreso del Estado será definitiva e inatacable;
 5. Si la resolución es absolutoria, el servidor público continuará en el ejercicio de sus funciones; y,
 6. La responsabilidad política sólo será exigible durante el período en el cual el servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión, o dentro de los dos años siguientes a partir de que concluya su encargo.

Artículo 93. La administración, vigilancia, disciplina y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial estará a cargo del Consejo de la Judicatura.

Artículo 95. Esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las normas reglamentarias y acuerdos expedidos por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura garantizarán la independencia, imparcialidad, especialización y profesionalismo de los Magistrados y Jueces que ejercen la función judicial del Estado.

Artículo 100. Los Magistrados no podrán ser removidos de su encargo durante el periodo de su designación, salvo por causas graves estipuladas en la presente Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con la misma votación requerida para su nombramiento, previa audiencia del servidor público, conforme a los procedimientos previstos en el título Décimo Tercero de esta Constitución.

7. Los Magistrados y Jueces no podrán ser perseguidos o reconvenidos por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función, ni por el sentido de sus votos o resoluciones;
8. Los Magistrados y Jueces gozan de inmunidad constitucional, que podrá ser confirmada o suspendida mediante declaración de procedencia del Congreso del Estado y conforme a las previsiones de la presente Constitución;
9. Los Magistrados y Jueces son sujetos a responsabilidad política, penal, administrativa y civil, en los términos del título Décimo Tercero de la presente Constitución y de las demás leyes aplicables; y,
10. Los Jueces, en caso de infracciones y faltas, quedarán sujetos a los procedimientos sustanciados ante el Consejo de la Judicatura del Estado y conforme lo determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En esos términos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 129, en lo concerniente, establece:

ARTÍCULO 76.-El Consejo de la Judicatura Estatal es un Organismo del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión; así como para emitir sus dictámenes y resoluciones; y tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

ARTÍCULO 79.-Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Estatal:

X.- Recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho de los asuntos que se tramitan ante las Salas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados y dependencias a su cargo, excepto cuando se trate de quejas contra Magistrados; de igual manera, procederá por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial, en los términos de la Ley respectiva.

Cuando la sanción impuesta al Servidor Público sea la suspensión, o destitución del cargo, o inhabilitación para ocupar otro, el Pleno del Tribunal podrá revocar, modificar o confirmar fundando y motivando debidamente según el caso, dicha sanción;

Por otra parte, la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en sus artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, señala:

Artículo 5. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 193 numeral 1, 195, 196 y 198 de la Constitución Estatal, respetarán los derechos de audiencia y debido proceso, estipulados en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales vinculantes, se desarrollarán de manera autónoma e independiente, según su naturaleza, y por la vía procesal que corresponda. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

...

Artículo 7. En los procedimientos para resolver sobre las responsabilidades política y penal, se observarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del Código Nacional.

Artículo 8. Son sujetos de responsabilidad política los servidores públicos que establece el artículo 195 numeral 1 de la Constitución Estatal.

La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso.

Artículo 9. Procede el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, se realicen en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Artículo 10. Afectan los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

- I. El ataque a las instituciones democráticas;
- II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal;
- III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
- IV. El ataque a la libertad de sufragio;
- V. La usurpación de atribuciones;
- VI. El abandono del cargo;
- VII. Cualquier infracción a las Constituciones Federal y Estatal, a las leyes federales o locales cuando cause perjuicios graves a la Federación, al Estado, al Municipio, a la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
- VIII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior; y
- IX. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las leyes que determinan el manejo de los recursos patrimoniales o económicos estatales.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se estará a lo dispuesto por la legislación penal y, en su caso, una vez reunidos los requisitos procedimentales, se formulará la declaración de procedencia por responsabilidad penal a la que alude la Constitución Estatal y la presente Ley.

Artículo 11. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a diez años.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

En el juicio político no procede el desistimiento.

Artículo 12. Cualquier ciudadano bajo su responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante el Congreso por las conductas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades originarias del Estado, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan, dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua originaria.

La denuncia deberá estar soportada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Comisión de Examen Previo del Congreso, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes.

Las denuncias anónimas y las no ratificadas en el término establecido, no producirán efecto. En cualquiera de estos casos, el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente y el Presidente de la Mesa Directiva ordenará su archivo.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de los dos años después de la conclusión de sus funciones

Artículo 13. La responsabilidad política se impondrá mediante juicio político ante el Congreso.

Corresponde a la Comisión de Examen Previo del Congreso declarar la procedencia del juicio político.

A la Comisión Instructora le compete, sustanciar el procedimiento de juicio político establecido en esta Ley y formular la acusación ante el Pleno del Congreso erigido en Gran Jurado, quién emitirá resolución con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Artículo 14. La determinación del juicio político se sujetará a lo siguiente:

- I. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso y ratificarse mediante comparecencia ante la misma, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Si se trata de una denuncia presentada en lengua originaria, el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios solicitará su traducción inmediata al español para proceder conforme lo señalan las disposiciones siguientes:

El escrito de denuncia deberá reunir al menos, los requisitos siguientes:

- a) **Nombre y domicilio del denunciante; en su caso, señalar domicilio en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo;**
 - b) **Nombre del servidor público denunciado y el cargo que desempeña o desempeñó;**
 - c) **Narración de los hechos que contengan los actos u omisiones por los que se considera se cometió la infracción, relacionándolos con la conducta o conductas señaladas en el artículo 10 de esta Ley;**
 - d) **Los elementos de prueba en que se apoyan los hechos narrados en el escrito de denuncia; y**
 - e) **Firma o huella digital, en su caso, del denunciante.**
- II. Ratificado el escrito de denuncia, la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso informará al Pleno y a la Comisión Permanente, en la sesión inmediata posterior, lo establecido en la fracción anterior para su turno a la Comisión de Examen Previo.**
- III. La Comisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 10 de la propia Ley, y si los elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Comisión de Examen Previo desechará de plano la denuncia presentada y ordenará su archivo definitivo, dará cuenta de ello a la parte interesada y a la Mesa Directiva para los efectos legales conducentes.**

A señalamiento expreso del denunciante, la Comisión de Examen Previo podrá solicitar las pruebas que se encuentren en posesión de una autoridad.

En caso de la presentación de elementos de prueba supervenientes, la Comisión de Examen Previo, mediante turno del Pleno, podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de elementos.

IV. El dictamen que emita la Comisión de Examen Previo, que deseche una denuncia, podrá ser rechazado por el Pleno del Congreso especificando los argumentos de su determinación y devuelto a la Comisión de Examen Previo para una nueva revisión; y

V. El dictamen que formule la Comisión de Examen Previo que declare procedente la denuncia, será remitida al Pleno del Congreso para efecto de formular el acuerdo correspondiente y ordenar su turno a la Comisión Instructora.

SEGUNDO. Es importante destacar que una vez analizado el escrito de Denuncia presentado por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, se pueden establecer que la misma se sustenta en la falta de presentación -en el tiempo indicado por la norma de la materia- del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022 la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.

Asimismo, mediante oficio número ASE-DGAJ-1390-2024, de fecha 16 de agosto de 2024, el Licenciado César López Velázquez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, quien informa que con fecha 08 de marzo de 2023, el Denunciado hizo entrega de forma extemporánea a través del Sistema ASEnet Cuenta Pública, de su Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022.

QUINTO.- Por otro lado, de acuerdo con las hipótesis previstas en los artículos 195 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que establecen en sus fracciones I, II y III, del artículo 10, que procede el fincamiento de responsabilidad política cuando se ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, así como por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Consecuentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹, "...ha sentado el criterio que permite concluir un principio general en lo relativo a infracciones graves, basado en las siguientes características:

1. Las infracciones de que se trate no pueden solucionarse a través de acciones personales.
2. Son cuestiones que no sólo afectan a una o varias personas en lo particular, sino que tienen trascendencia colectiva.
3. Son generalizadas; y,
4. No son instantáneas, se refieren a un estado de cosas en un lugar, en una entidad o en una región.

Por lo que antes de dilucidar si es procedente o no declarar la procedencia de Juicio Político en contra del Presidente Municipal de Iliatenco, Guerrero, es menester tomar en cuenta los principios de autonomía de los municipios, pero principalmente lo establecido en el artículo 15, segundo párrafo de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que a la letra dice:

"Artículo 15. El Informe Financiero Semestral forma parte de la Cuenta Pública y deberá presentarse a la Auditoría Superior del Estado en la segunda quincena del

¹ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/97. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

mes de agosto del ejercicio fiscal que se informe, en los términos que se establezcan en los criterios que para tales efectos se emitan.

La falta de presentación del Informe Financiero Semestral dentro del término establecido, será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes."

LO RESALTADO ES PROPIO.

De lo establecido en el numeral antes transcrito se aprecia que por no entregar en el tiempo indicado el Informe Financiero Semestral, el Servidor Público titular del Ente Fiscalizable, puede ser sancionado de manera administrativa, e inclusive penal, de a las leyes correspondientes.

No es óbice que el titular de la Auditoría Superior del Estado, se encuentra facultado para interponer Juicio de Responsabilidad Política, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 41 de la Ley antes referida, en términos del artículo 195 de la Constitución Política del Estado, por actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Sin embargo, resulta evidente que para que la determinación de Responsabilidad del Servidor Público denunciado es menester que se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 195 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 10 de la Ley Número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a saber, que existen elementos que actualizan la presunta responsabilidad de los servidores públicos y los elementos de los que pueda deducirse una posible infracción a las hipótesis que prevén los multirreferidos artículos; elementos estos últimos que no se configuran pues, como ya se vio, las hipótesis que prevén los artículos en comento, implican que la conducta desplegada por los funcionarios se traduzcan en una infracción a la Constitución o leyes estatales o municipales que causen daños graves al Estado, a algún Municipio o a la sociedad, o trastornen el funcionamiento normal de sus instituciones, o que las posibles violaciones a las garantías individuales o sociales, sean generalizadas y sistemáticas en perjuicio del interés público, circunstancias que como se ha puesto en evidencia, en el presente caso no se surtieron y, en consecuencia, hace improcedente incoar procedimiento de Responsabilidad Política en contra del Servidor Público denunciado.

Esto porque de conformidad con el informe establecido en el oficio número AS-DGAJ-1390-2024, de fecha 16 de agosto de 2024, el Servidor Público denunciado presentó de manera extemporánea su Informe Financiero Semestral del Ejercicio Fiscal 2022, lo que conlleva a que la autoridad fiscalizadora realice la función específica y, en determinado caso emitir las recomendaciones que sean procedentes; lo que a su vez, hace aplicable únicamente lo establecido en el segundo párrafo del artículo 15 de la mutireferida Ley de la materia, es decir, se le finquen responsabilidades administrativas y/o penales, de acuerdo al procedimiento que la Auditoría Superior realice al respecto".

Que en sesiones de fecha 22 de agosto del 2024, el Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiéndose la Comisión Dictaminadora reservado el derecho de exponer los motivos y el contenido del Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo particular, aprobándose el dictamen por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que no se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, contra del C. Eric Sandro Leal Cantú, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 885 POR EL QUE NO SE ADMITE Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA PRESENTADA POR EL C. MARCOS CÉSAR PARIS PERALTA HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, CONTRA DEL C. ERIC SANDRO LEAL CANTÚ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- No se admite y se declara improcedente la denuncia de Juicio de Responsabilidad Política presentada por el C. Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en su carácter de Auditor Superior del Estado, en contra del C. Eric Sandro Leal Cantú, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por tanto, no ha lugar a la incoación del procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto a la parte Denunciante.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el conocimiento general y efectos legales procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.

**DIPUTADA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
JENNYFER GARCÍA LUCENA.**

Rúbrica.

**DIPUTADA SECRETARIA.
ANGÉLICA ESPINOZA GARCÍA.**

Rúbrica.

**DIPUTADA SECRETARIA.
PATRICIA DOROTEO CALDERÓN.**

Rúbrica.





PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

TARIFAS

Inserciones

POR UNA PUBLICACIÓN	
PALABRA O CIFRA.....	\$ 3.26
POR DOS PUBLICACIONES	
PALABRA O CIFRA.....	\$ 5.43
POR TRES PUBLICACIONES	
PALABRA O CIFRA.....	\$ 7.60

Precio del Ejemplar

DEL DÍA	\$ 24.97
ATRASADOS.....	\$ 38.00

Suscripción en el Interior del País

SEIS MESES.....	\$ 543.94
UN AÑO.....	\$ 1,167.13

Dirección General del Periódico Oficial

Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado
Edificio Montaña 2° Piso, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62
Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39074
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

<https://periodicooficial.guerrero.gob.mx/>



DIRECTORIO

Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda
Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero

Dra. Anacleta López Vega
Encargada de Despacho de la Secretaría General
de Gobierno

Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos

Dirección General del Periódico Oficial

